

# EL INGRESO MÍNIMO FAMILIAR SUPERA EL SUELDO DEL 25% DE LOS TRABAJADORES

Las ayudas públicas a una familia con dos hijos rondan los 1.400 euros, casi el mismo sueldo medio de más de cinco millones de empleados

Los expertos alertan de que el diseño de los subsidios desincentiva la vuelta al mercado laboral

José María Camarero

El incremento de las ayudas públicas que reciben miles de familias está ensombreciendo el salario de millones de trabajadores, que contemplan cómo esos subsidios para los hogares superan sus sueldos y sin necesidad de tener que realizar ninguna actividad profesional. Con las últimas subidas del ingreso mínimo vital (IMV) encima de la mesa, un 25% de los asalariados cobra ya lo mismo o menos que una unidad familiar que perciba la renta mínima actualizada.

La revisión del ingreso mínimo, que ha dado un salto del 11,4% este año tras ser validado por el Congreso esta semana, supone que una familia de dos adultos y dos menores pueda recibir del Estado 1.393 euros al mes. En paralelo, una cuarta parte de los trabajadores se mueve en un rango salarial medio que se encuentra por debajo de esa cuantía, al no superar los 1.400 euros, según la estadística del INE. E incluso en los dos deciles más bajos de la estructura salarial, las remuneraciones apenas llegan a los 1.280 euros.

Aunque la comparación de ambas situaciones es distinta, al tratarse de una renta familiar, por un lado, y del sueldo de una persona, por otro, la su-

bida de esta ayuda pública que ofrece el Estado desde 2020, junto a otros muchos apoyos de todas las administraciones, revela la distorsión que provocan las subvenciones: son necesarias para los hogares más vulnerables pero cada vez se aproximan más a lo que cobran 5,5 millones de trabajadores. La prueba de que el sistema de protección español no es lo eficiente que debería se encuentra en la estadística de hogares que consiguen salir de la pobreza antes y después de recibir estos apoyos.

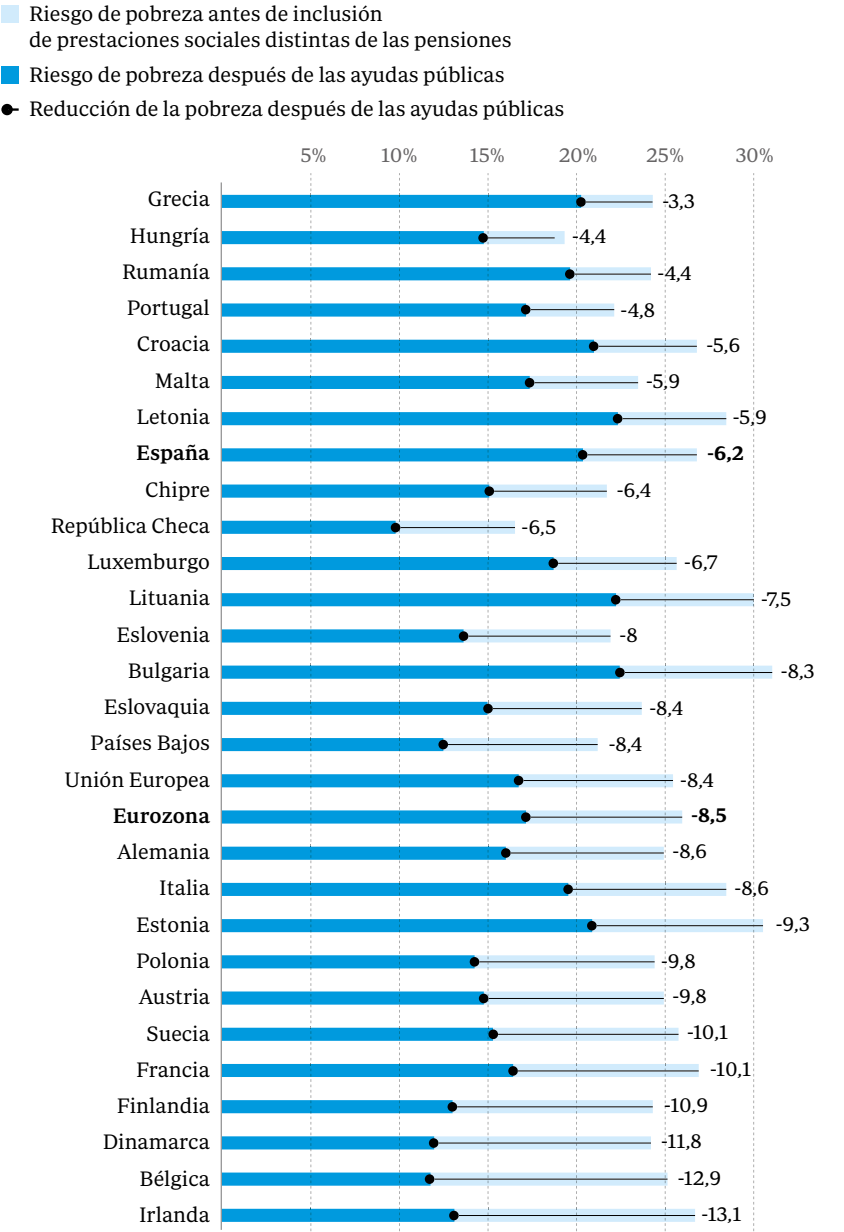
### Reducir la pobreza

España se sitúa en los últimos lugares de ese ranking, ya que solo consigue que la tasa de hogares en situación vulnerable se reduzca en poco más de seis puntos porcentuales tras recibir apoyos públicos, según la estimación realizada por el Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de datos de Eurostat. Una mejora muy lejana a la que se consigue en la media de la eurozona, donde el porcentaje de familias que mejoran su situación es del 8,5%, por no hablar de Irlanda (logra mejorarla un 13%) o Francia (10%). Coincide en este análisis con el de Jesús Fernández-Bravo, presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas: «El objetivo no es solo proteger renta, sino facilitar transiciones efectivas al empleo».

El problema del sistema de apoyos que hay en España es «la ausencia de un buen diseño», explica Gregorio Izquierdo, director general del IEE. «Eso es lo que nos diferencia realmente con Europa, porque aquí hay un sistema de prestaciones que se solapan y no tienen efectos en el mercado de trabajo, que es para lo que deberían estar pensadas», apunta. «Al solaparse unas con otras, dan lugar a un nivel de renta social superior al del propio mercado de trabajo, con riesgo de de-

### Pobreza en la UE, antes y después de las ayudas públicas

En porcentaje



Fuente: Estimación del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de Eurostat

ABC

El sistema debe garantizar, como en Europa, que trabajar siempre suponga una ganancia neta clara, explican los analistas

La complejidad de las ayudas públicas aumenta cuando a las estatales se unen otras autonómicas, provinciales y locales

sincentivo» a ejercer una actividad. Aunque la mayor parte de estas ayudas están vinculadas al compromiso de buscar un trabajo, la realidad social y administrativa es más compleja. La realidad de estos subsidios en España es que «se están desvinculando del trabajo, lo que hace que la situación inicial de vulnerabilidad se multiplique», apunta Izquierdo. En el caso del IMV, está asociado a un com-

promiso de empleo, de participar en itinerarios de inclusión o de mejorar la empleabilidad. Incluso en 2023 se cambió su diseño para que tener determinados ingresos por trabajo no implicara una reducción de la ayuda. El último informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) apunta que el IMV presenta un desincentivo permanente al empleo y reduce la probabilidad de





Un trabajador en un taller de carrocerías. (EP/Kike Rincón)

trabajar en un 12%. La institución advierte de que esa desmotivación aumenta a más del 20% entre los menores de 30 años, los hogares monoparentales y los titulares de la ayuda que perciben prestaciones más altas.

La complejidad de las ayudas públicas aumenta cuando a los subsidios estatales, como el IMV, se unen otros autonómicos, provinciales y locales, en un auténtico puzle de subvenciones sin coordinación entre sí, como recalcan los expertos consultados por ABC. Miguel Ángel García, de Fedea, recuerda que en España existe la posibilidad de cobrar un subsidio por desempleo y obtener otras ayudas de distinta índole en otras administraciones. Este experto recuerda, además, que «quien paga la prestación no es quien tiene la competencia de la política activa de empleo». Es decir, el Estado abona la ayuda, pero son los servicios laborales autonómicos, que no pagan esa ayuda ni asumen ese coste presupuestario, los que están obligados a orientar en el retorno al trabajo al beneficiario de la misma.

El caso del subsidio por desempleo para mayores de 52 años es una de las herramientas a las que se apunta para

mejorar la eficacia en el objetivo de reincorporación al mercado de trabajo y evitar que se siga cobrando hasta jubilarse. «El 50% de quienes cobran la prestación por desempleo son mayores de 52 años», asegura Miguel Ángel García, que insiste en la necesidad de una «coordinación global entre administraciones» para mejorar la eficacia de la vulnerabilidad, que no llega a resolverse.

### Dispersión de ayudas

Esa dispersión de ayudas es la que señala Valentín Bote, director de Randstad Research como uno de los retos a resolver. «Muchas se pusieron en marcha a partir de la pandemia para ayudar a familias sin recursos, pero al final te pones a sumar y de repente las cuentas comienzan a cuadrar en algunas casas», indica este experto al referirse al efecto agregado de percibir el IMV estatal, las ayudas autonómicas y muchas locales vinculadas a descuentos del IBI o alquiler.

Los cambios introducidos hace dos años en el subsidio para mayores, por el que se abonan 480 euros al mes pero con una cotización que es del 125% sobre el SMI, pueden desincentivar la aceptación de un empleo a los que les llegue una oferta de menos de 1.350 eu-

**El 80% de las necesidades básicas, vía subvención**

Aunque las circunstancias de cada hogar son distintas, hay un punto de inflexión económico en el que a una persona le puede compensar cobrar una ayuda antes que un puesto de trabajo. «Es muy subjetivo», explica Valentín Bote, de Randstad Research, «pero cuando nos acercamos a que la suma de las ayudas equivale al 80% de lo que esa persona espera como salario, se empieza a estar en una situación de mucho desincentivo», avisa este experto. A partir de ahí, subraya, se entra en un terreno en el que una persona se pregunta si con ese 80% de las necesidades cubiertas le da para vivir. También depende de otras circunstancias, como la zona geográfica donde resida. No es lo mismo la gran ciudad que un pequeño pueblo.

ros al mes, porque haciendo cuentas les compensa más percibir el subsidio de cara a la jubilación, por la cotización extra que tiene asociada. Incluso si la oferta llegara a 1.450 euros, optar por la ayuda puede seguir siendo una decisión económicamente óptima de cara a blindar la pensión futura.

La última subida del SMI a 1.221 euros brutos al mes abre la puerta a otro incremento del número de perceptores del subsidio para mayores al elevarse el límite de rentas para recibir este ingreso hasta 915,75 euros mensuales. También sube la base mínima de cotización asociada a esta ayuda, que se encuentra ya en los 1.780 euros.

El problema de esta realidad, que no se da en otros países de Europa, es que «surge cuando la ayuda se pierde de forma brusca al aceptar un empleo y no existe una retirada gradual compatible con el salario», indica Jesús Fernández-Bravo. En esos casos la mejora real de ingresos por aceptar un empleo «puede ser muy limitada». Por eso la clave es que el sistema garantice que trabajar suponga siempre una ganancia neta clara para facilitar la transición desde la ayuda, esencial para muchos hogares, hacia el trabajo, en un contexto, además, en el que hay sectores que no pueden cubrir sus vacantes.